



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Yovanny Estupiñán Rico
DEMANDADO	Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia Coninsa SA Conconcreto SA
RADICADO	05 001 31 05 019 2022 00105 01
TEMA	Acreencias laborales - Consulta
DECISIÓN	Confirma sentencia

Medellín, 27 de octubre de 2023.

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a desatar el grado jurisdiccional de consulta en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Pretensiones

El demandante pide que se declare que celebró un contrato de trabajo escrito con el Consorcio CCC Ituango —conformado por las sociedades demandadas Coninsa SA, Conconcreto SA y Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia (antes, Camargo Correa Infra Construcoes SA Sucursal Colombia)— que se extendió entre el 24 de enero de 2013 y el 30 de enero de 2019, y que terminó de manera unilateral e injusta el 19 de febrero de 2020; que se declare nulo o ineficaz el nuevo contrato laboral, ya que fue inducido a error al suscribirlo, al tenor del art. 43 del CST; que se declare que el trabajador fue despedido sin justa causa; que se condene a las accionadas a efectuar los siguientes pagos: la indemnización por despido injusto del art. 64 del CST; las primas de alimentación, de vivienda y de campo; la reliquidación o reajuste de cesantías, vacaciones, prima de servicio legal, horas extras, subsidios

de transporte y demás conceptos probados *ultra y extra petita*; la indemnización moratoria del art. 65 del CST, y las costas procesales.

Hechos

Como supuestos fácticos, relató que el 24 de enero de 2013 se vinculó al servicio del Consorcio CCC Ituango, mediante contrato de trabajo escrito; que laboró ininterrumpidamente hasta el 30 de enero de 2019 en el cargo de operador de vibrocompactador; que el último salario devengado fue de \$1.078.000 mensuales; que su jornada laboral era de lunes a domingo, de 5:00 a. m. a 6:00 p. m. con una hora de descanso; que, además, laboró horas extras diurnas y nocturnas y días festivos. Afirmó que se pactaron 3 primas extralegales: de campo, de alimentación y de vivienda, las que no le fueron canceladas ni se tuvieron en cuenta en su liquidación. Manifestó que, durante la relación laboral, permaneció afiliado a la EPS SURA y a la AFP Colfondos.

Sostuvo que, el 30 de enero de 2019, el empleador llamó a todos los trabajadores para realizar la liquidación de sus contratos de trabajo y firmar unos nuevos sin su consentimiento; dijo que los obligaron a cambiar el contrato, perdiendo la antigüedad. Además, indicó que ese nuevo documento contenía cláusulas ineficaces, como la renuncia a la indemnización por despido.

Expresó que, el 30 de enero de 2019, mediante escrito, el consorcio dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa y sin reconocer la indemnización a que tiene derecho por todo el tiempo laborado; que, el 15 de octubre de 2020, reclamó los derechos laborales pedidos en este proceso, con el objeto de impedir la prescripción de sus derechos.

Contestación

La apoderada judicial del consorcio, en representación de este y de las empresas demandadas, sostuvo que son ciertos los hechos relacionados con la existencia del contrato laboral del actor, aclarando

que fue vinculado directamente por el consorcio; también aceptó el cargo que él desempeñó y la reclamación presentada. Sobre los demás hechos, manifestó que no son ciertos.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación, pago y prescripción.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de noviembre de 2022, declaró que entre Yovanny Estupiñán Rico y el Consorcio CCC Ituango, compuesto por las sociedades demandadas, en calidad de empleadoras, existió un contrato de trabajo entre el 12 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2018, el que finalizó por renuncia del demandante. Absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y condenó en costas al actor.

Para adoptar tal decisión, consideró que el demandante no demostró la existencia de los extremos laborales que alega, ni tampoco que el consorcio empleador le adeudara los conceptos laborales pedidos. Además, revisadas las colillas de pago y las condiciones fijadas en el contrato, evidenció que no hay conceptos deficitarios por pagar.

Consulta

La sentencia no fue objeto de recurso alguno y, en razón de que fue totalmente desfavorable a la parte actora, se conocerá el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

Alegatos

Dentro del término del respectivo traslado, las partes no emitieron pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES

No se discute en el proceso la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y el Consorcio CCC Ituango, el que está conformado por las codemandadas, ni el cargo ocupado por el actor, quien fungía como operador de vibrocompactador.

Con base en lo anterior, se revisará la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta. Los problemas jurídicos que debe resolver la sala son: (i) la modalidad contractual existente entre las partes; el número de contratos suscritos y la validez del último, así como los extremos temporales de la relación laboral; (ii) si hubo despido sin justa causa y, en caso afirmativo, la procedencia de la indemnización del art. 64 del CST; (iii) si es procedente el reconocimiento y pago de las primas extralegales de alimentación, de vivienda y de campo y, en caso afirmativo, si procede la reliquidación de los conceptos reclamados; (iv) si procede la indemnización moratoria del art. 65 del CST; y (v) las costas procesales.

i) Modalidad contractual, validez del último contrato y extremos temporales

Conforme a los principios que informan la carga de la prueba, incumbe demostrar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta (art. 1757 CC); además, las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (inc. 1 del art. 167 CGP). Los postulados anteriores significan que al demandante le corresponde demostrar el contrato de trabajo, la remuneración convenida, el despido y los extremos temporales de la mencionada relación de trabajo, entre otros.

De conformidad con el artículo 24 del CST, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Esta presunción es de carácter legal y se interpreta de la siguiente manera: cuando el demandante aduce que estuvo vinculado por un contrato de trabajo, le compete demostrar la prestación personal del servicio, con lo que, de inmediato, se presume la subordinación

jurídica; empero, el empleador puede destruirla probando que ese último elemento no existió, porque se trató de una relación jurídica distinta a la laboral.

Ahora, para dilucidar lo anterior, se revisa la prueba documental aportada por el consorcio demandado, dentro de la cual se encuentra el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito entre el Consorcio CCC Ituango y Yovanny Estupiñán Rico, en calidad de trabajador, documento en el que se estableció como fecha inicial de la relación el 12 de febrero de 2015 y se estipuló, como fecha de terminación, el 11 de junio de 2015; el cargo asignado era el de operador de vibrocompactador; por último, el salario inicial se fijó en \$1.000.000 mensuales. (folios 51-53, PDF 10).

También se encuentra la liquidación del contrato de trabajo donde se plasmó que este se extendió entre el 12 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2018 y que el nexo culminó por renuncia voluntaria. Asimismo, en el certificado laboral expedido por el coordinador de Gestión Humana del consorcio constan los mismos extremos y en el certificado de la Nueva EPS se establece que la fecha de ingreso del trabajador al servicio del Consorcio CCC Ituango fue el 12 de febrero de 2015. (folios 69, 70 y 67, PDF 1, respectivamente).

Ahora, escuchados los interrogatorios de parte que rindieron los representantes legales de las sociedades demandadas: Luis Alberto Valenzuela Cadavid (Concreto SA), Daniela García Restrepo (Coninsa Ramón H SA) y Karina Cifuentes Rodríguez (Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia), se encuentra que ellos afirman, al unísono, que el actor prestó sus servicios para el consorcio desde el 12 de febrero 2015 hasta el 31 de julio de 2018 y que se vinculó mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un año.

Cabe resaltar que el actor no asistió a la audiencia del art. 77 del CPTSS, por lo que, en esa diligencia, el juez le aplicó las consecuencias señaladas en el inciso 6 del numeral 1 de la misma norma. También se

evidencia que no acudieron los testigos que él convocó y que fueron oportunamente decretados.

De lo anterior se concluye que solo logró demostrarse que el contrato de trabajo entre el demandante y el Consorcio CCC Ituango se ejecutó desde el 12 de febrero 2015 hasta el 31 de julio de 2018, por lo que se tomarán estos como los extremos temporales de dicha relación, la que fue pactada en la modalidad a término fijo, como lo indicó el juez de instancia.

Por otra parte, si bien el actor afirma que hubo un nuevo contrato, no existe prueba alguna que dé fe de ello, a lo que se suma que, a pesar de que el representante legal de Concreto SA, en su interrogatorio, mencionó un cambio en las condiciones laborales, especificó que se firmó un otrosí con algunos trabajadores, que contenía una «cláusula de pago por contrato por porcentaje de obra», sin que sea claro si esta modificación cobijó al trabajador, por tanto, no logra establecerse la existencia de un nuevo contrato, tal como lo concluyó el juez de conocimiento.

Por lo anterior, habrá de confirmarse la declaración del contrato y su duración, tal y como se fijó en la sentencia revisada, ante la ausencia de demostración de otro vínculo diferente que uniera a las partes.

(ii) Despido sin justa causa e indemnización del art. 64 del CST

Para resolver lo anterior, se verifica que, en el folio 65 del archivo que contiene la contestación de la demanda, aparece un escrito fechado el 31 de julio de 2018, suscrito por el actor, en el que manifiesta que renuncia a su trabajo «por motivos de adelantar estudios superiores en la universidad ESAP, en la ciudad de Bucaramanga», misiva que fue aceptada por su empleador.

En los interrogatorios de parte recaudados también se indicó que la relación laboral culminó por renuncia del trabajador.

Así las cosas, contrario a lo dicho por el iniciador del proceso en la demanda, en cuanto a que fue despedido sin justa causa, el material probatorio permite inferir que el contrato de trabajo celebrado entre las partes procesales finalizó por decisión unilateral y voluntaria del trabajador, el 31 de julio de 2018; por tanto, no hay lugar a imponerle al empleador la indemnización por despido sin justa causa consagrada en el art. 64 del CST, como lo determinó el *a quo*, por lo que también se avalará su sentencia en este punto.

(iii) Primas extralegales de alimentación, de vivienda y de campo, y la reliquidación de los conceptos reclamados

En cuanto a las primas extralegales, se observa que la cláusula 2 del contrato citado consagra que las partes acuerdan expresamente que las primas de campo, de alimentación, de vivienda y demás bonificaciones o beneficios de carácter extralegal que eventualmente pague el consorcio, no tendrán naturaleza o carácter de salario para ningún efecto, ya que se entiende que dichos pagos constituyen un medio para facilitar la prestación del servicio y para desempeñar a cabalidad sus funciones y no tienen la condición de constituir retribución directa del trabajo, en los términos del art. 15 de la Ley 50 de 1990, que modificó el art. 128 del CST.

Por otra parte, revisadas las colillas de pago a nombre del actor, en ninguna se registra pago por concepto de alguna de las primas extralegales que reclama; solo se evidencia el pago de la prima legal de manera correcta. Tampoco existe otro medio probatorio del que se puedan inferir las condiciones que las generaban, ni su forma de pago ni alguna otra información sobre ellas.

Ahora, la señora Cifuentes Rodríguez manifestó en su declaración que el actor no tenía derecho a primas extralegales como las pedidas, porque estas no se pactaron con ningún trabajador operativo.

De lo anterior, concluye esta sala que el actor no demostró su derecho al pago de estas prestaciones de carácter extralegal. En consecuencia, tampoco tiene derecho a que se reliquiden las prestaciones sociales y las demás acreencias laborales reclamadas, teniendo en cuenta dichas primas, lo que significa que debe absolverse a las demandadas de estos pedimentos, como en efecto lo hizo el juez de primer grado.

(iv) Indemnización moratoria del art. 65 del CST.

Con relación a esta indemnización, por su naturaleza eminentemente sancionatoria, su imposición no procede de manera automática, sino que deben analizarse las razones por las cuales el empleador incumplió sus obligaciones; en todo caso, se presume siempre su actuar de buena fe, como principio constitucional, y, en ese caso, la imposición de la sanción solo procede si se acredita que el dador de empleo obró con intención fraudulenta.

En el caso de estudio, no es procedente efectuar condena por ese concepto, ya que no se demostró que el extrabajador tuviera derecho a alguno de los pagos pretendidos, ni menos se verificó la mala fe de su antiguo empleador. Por tanto, no es viable esta sanción, tal y como se indicó en la providencia de instancia, por lo que se confirmará.

(iv) Costas procesales

En innumerables providencias se ha dejado claro que la ley procesal atiende al criterio objetivo para imponer las costas, es decir, en todo caso, estas corren a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del trámite, es decir, sin que sea trascendente si actuaron o no de buena fe. En el presente caso, no salieron adelante las pretensiones del demandante, de modo que debe confirmarse la sentencia que se le impuso.

En conclusión, considera la sala que la sentencia que se revisa por vía de consulta merece ser confirmada en su integridad.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo indicó el juez. En esta instancia no se causaron, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia que se revisa por vía de consulta, proferida por el Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de noviembre de 2022, en el proceso instaurado por Yovanny Estupiñán Rico contra Coninsa SA, Conconcreto SA y Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia.

SEGUNDO: Sin costas procesales en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ